



Columna



Yasna Anabalón, académica de Trabajo Social
Universidad de Las Américas

Violencia educativa

La violencia educativa, manifestada a través de agresiones físicas, verbales, simbólicas o psicológicas, representa una problemática estructural que desafía profundamente la labor pedagógica de las instituciones escolares y superiores. Desde el Trabajo Social, esta realidad puede ser comprendida como el resultado de desigualdades históricas y condiciones sociales arraigadas en contextos familiares, comunitarios y culturales etiquetados como “vulnerables”.

No se trata simplemente de situaciones aisladas entre estudiantes o distintos actores de la comunidad educativa, sino de formas institucionalizadas y muchas veces normalizadas a través de prácticas pedagógicas autoritarias, reglamentos internalizados y estructuras de exclusión.

La violencia educativa no es sólo un acto individual, sino una respuesta al modelo de convivencia agrietado y de una ciudadanía aún en construcción, con creencias arraigadas en el individualismo y el “ganar-ganar”.

En América Latina, algunos estudios realizados por trabajadores sociales como Adriana Sanhueza y Emmanuel Vega revelan que entre el 50 y 90% del estudiantado ha experimentado violencia verbal y emocional en establecimientos educativos, incrementándose hasta un 60% en lo que respecta a violencia física y amenazas.

En Chile, si bien se han implementado marcos normativos pa-

ra promover la buena convivencia escolar (protocolos, ley y programas), las profundas brechas sociales y territoriales, entre otras, dificultan una respuesta integral.

El Trabajo Social, como disciplina científica, comprende el fenómeno desde sus raíces estructurales y trata de actuar con pertinencia ética, cultural y territorial. Su labor se despliega en la articulación entre comunidades educativas, familias, redes de protección y sistemas intersectoriales, proponiendo un enfoque de derechos, cuidado y justicia.

Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de actuar como mediadores, facilitadores y agentes transformadores de las relaciones escolares, promoviendo diagnósticos participativos que permitan identificar factores de riesgo, prácticas institucionales excluyentes y oportunidades para fortalecer vínculos afectivos saludables.

Esta labor contribuye a una formación integral de las personas, orientada al desarrollo de competencias emocionales, resolución no violenta de conflictos y comprensión crítica de la realidad desde un enfoque interseccional. El trabajador social no sólo interviene, sino que tiene un rol protagónico en la construcción de propuestas educativas articuladas con las políticas públicas. Sólo mediante este compromiso ético y territorial es posible avanzar hacia comunidades educativas más justas, afectivas e inclusivas.